

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021)**

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por NANCY DEL SOCORRO VILLEGAS CORREA contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- (Rad. 05001-31-05-016-2018-00361-01).

**ANTECEDENTES**

Pretende la demandante en lo fundamental se declare la ineficacia del traslado del RPMPD administrado por Colpensiones a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.; como consecuencia se trasladen todas las sumas de dinero, bonos, cotizaciones, sumas adicionales recibidas por concepto de aportes obligatorios y rendimientos; que se ordene a Colpensiones aceptar a la actora en su régimen; y por último, que se condene en costas a la entidad demandada (fl. 2).

Como fundamento expuso, en síntesis, los siguientes hechos: se afilió al ISS el 22 de marzo de 1964 (sic); se trasladó al régimen de ahorro individual,

administrado por Protección S.A., el 1 de octubre de 2001; este traslado fue producto del error en que el asesor de la AFP la hizo incurrir, pues no se le brindó una asesoría adecuada e integral, ya que no se le hizo mención de los beneficios, desventajas y las graves consecuencias que podría producir su traslado; agrega que el 21 de febrero de 2011 recibió una reasesoría por parte de Protección S.A., en la cual se persistió en las falencias iniciales; la proyección pensional de su pensión de vejez es significativamente más alta en el régimen de prima media con prestación definida; solicitó el traslado a Colpensiones, pero este le fue negado; y finaliza anotando que tiene derecho a lo que solicita (fls. 2 a 4).

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a la totalidad de las pretensiones. Preciso que la fecha de afiliación de la demandante al ISS fue el 29 de septiembre de 1997 y que el 22 de marzo de 1964 es la fecha de nacimiento; aceptó el traslado al régimen de ahorro individual y la reclamación que se le hizo; de los demás hechos dijo que no le constaban. Propuso como excepciones de mérito las que denominó: inexistencia de la obligación de reconocer y pagar la pensión de vejez, imposibilidad de aplicar precedente judicial y la inversión de la carga de la prueba, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas (fls. 181 a 184).

Protección S.A. también dio contestación al libelo, oponiéndose a la prosperidad de todo lo pedido. Sostuvo que la demandante se vinculó al RPM, de acuerdo a la oficina de bonos pensionales, el 25 de octubre de 1983; aceptó el traslado de régimen el 15 de agosto de 2001, con efectividad el 1 de octubre siguiente, así como la reasesoría que se le realizó en el año 2011; de los demás hechos dijo que no eran ciertos o que no le constaban, pero fue enfática en manifestar que la entidad nunca hizo incurrir en error a la demandante, y que a ésta se le proporcionó una información completa, verdadera y ajena a los errores. Como excepciones de mérito propuso las que denominó inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena

fe, prescripción y aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones, entre otras (fls. 71 a 108).

El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 18 de junio de 2020, luego de encontrar incumplido el deber de información, declaró ineficaz el traslado que hizo la demandante a través de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. al régimen de ahorro individual y, por ende, dispuso como única vinculación válida sin solución de continuidad la que tenía con el Régimen de Prima Media con Prestación definida; por consiguiente, ordenó a la AFP Protección S.A. a trasladar a Colpensiones, todos los aportes que hubiera recibido con motivo de la afiliación de la demandante incluyendo todo el dinero recibido de las cotizaciones, los bonos pensionales, cualquier suma adicional, frutos e intereses, sin que se pueda retener los gastos de administración ni los aportes de solidaridad ni ningún otro concepto; además, ordenó a Colpensiones a la reactivación de la afiliación al RPMPD y el recibo de los dineros que sean trasladados por el fondo de pensiones demandado; finalmente, condenó en costas a la AFP PROTECCIÓN S.A. y fijó como agencias en derecho la suma de \$2.000.000, a favor de la señora VILLEGAS CORREA (fl. 193).

La apoderada de la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación solo con respecto al traslado de los montos correspondientes a los gastos de administración, seguro previsional y reaseguros, ya se según argumenta, son conductas que encuentran justificación en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003. Agrega que con una orden de éstas se estaría generando un enriquecimiento ilícito por parte de Colpensiones. Hace referencia a un concepto de la Superfinanciera del 17 de enero de 1020, en el que se sostiene que la devolución de las cuotas de administración no es procedente. Afirma que lo referente a seguros previsionales ya fue cancelado a las aseguradoras y cubrió los riesgos correspondientes. Finaliza diciendo que estas sumas de dinero se

encuentran afectadas por la prescripción, entre otras razones porque no financian la pensión de vejez (fls. 204 a 206).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

Cuestión Previa: En el memorial de alegatos de segunda instancia, Colpensiones solicitó la nulidad del trámite de primer grado, porque si bien se interpuso el recurso de apelación en oralidad, su sustentación ocurrió a través de medio escrito; lo que permitió el *a quo* en aplicación del Decreto 806 de 2020, concediendo la alzada.

Al respecto, la mayoría de esta Sala encuentra útil resaltar que si bien a partir de los artículos 42 y 66 del CPT y de la SS, pudo pensarse en la configuración de un vicio procesal al no sustentarse en oralidad el recurso de apelación sobre la providencia recurrida, lo cierto es que tal situación no tiene la virtualidad de generar nulidad alguna. En efecto, la consecuencia prevista en el ya referido artículo 42, para la mayoría de este cuerpo colegiado, no debe aplicarse irreflexivamente, es menester auscultar lo ocurrido en el caso concreto frente al derecho de defensa y debido proceso de que son titulares las partes, y en el evento que estos se hubieren mantenido a salvo, la actuación -pese al defecto- debe validarse y continuarse con el curso del proceso (resolviéndose la apelación), toda vez que procesalmente debe buscarse la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial y la obtención de resultados normativos institucionales, tales como: la economía procesal y la celeridad, lo que encuentra fundamento en el artículo 209 de la Constitución Política, y en el inciso 1º del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual establece que: *“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal*

*competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley...*”(Consultar la sentencia T-334 de 2020).

En el sub examine, pese a que el recurso de apelación se sustentó de manera escritural, con esa actuación no se quebrantaron las garantías *ius* fundamentales resaltadas, al contrario, se otorgó un plazo para la sustentación del medio de impugnación -lo que resulta ser más beneficioso para los litigantes-, por consiguiente, el vicio procesal que se presenta no impide la solución de recurso vertical.

Aclarado lo anterior, y para la solución del caso, la Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de apelación planteados por la apoderada de Protección S.A., conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001. Aquellas condenas u órdenes impuestas a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones serán estudiadas por la vía de la consulta (art. 69 del C.P. del T. y de la S.S.), de acuerdo al criterio expresado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias de tutela del 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2013, rads. 34552 y 51237, y más recientemente en la SLT7382-2015 (Rad. 40200).

No es objeto de discusión en este proceso, que la demandante nació el 22 de marzo de 1964 (fl. 17); que estuvo afiliada al ISS desde el 25 de octubre de 1983 hasta el mes de septiembre de 2001 (fls. 39 a 41) y que el 15 de agosto de 2001 firmó solicitud de traslado al Régimen de Ahorro Individual, con efectividad a partir del 1 de octubre de ese mismo año, a través de PROTECCIÓN S.A. (fls. 35), AFP a la cual se encuentra actualmente vinculada. Además, que el 21 de febrero de 2011 recibió una reasesoría pensional (fl. 36).

El conflicto jurídico básico a resolver, gira en torno a esclarecer si el traslado de la demandante del RPMPD al RAIS fue o no ajustado a la ley, y en caso de que no lo hubiere sido, si hay lugar o no a la devolución de lo descontado por Protección S.A. mientras ha tenido afiliada a la actora, concretamente de los elementos denominados: gastos de administración, seguro previsional y garantía de la pensión mínima. Esto implica establecer, entre otros asuntos, si la voluntad de la accionante al momento de trasladarse del RPMPD al RAIS estuvo afectada por un vicio en el consentimiento o conducta antijurídica.

Para estos fines, empezando por el relativo a la ineficacia, la Sala estima del caso hacer referencia textual, dado el poder vinculante de este tipo de decisiones (arts. 86 del CPTSS y 333 del CGP), a algunos apartes de la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia el pasado 8 de mayo (SL1688-2019, Rad. 68838), la cual compendia para el día de hoy, con total claridad y precisión, el estado de la materia en asuntos de ineficacia de traslados de régimen pensional por falta de una adecuada información, las consecuencias de la declaración dada por los afiliados en los documentos de traslado de régimen, la carga de la prueba, y los alcances de la ineficacia. Sobre el deber de información, en ésta quedó dicho:

*>“...El anterior recuento sobre la evolución normativa del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones podría, a grandes rasgos, sintetizarse así:*

>

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
-------------------	---	---

Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto Con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

1.4 Conclusión: La constatación del deber de información es ineludible

*Según se pudo advertir del anterior recuento, las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido.*

*Así las cosas, el Tribunal cometió un primer error al concluir que la responsabilidad por el incumplimiento o entrega de información deficitaria surgió con el Decreto 019 de 2012, en la medida que este exista desde la expedición de la Ley 100 de 1993, el Decreto 663 de 1993 y era predicable de la esencia de las actividades desarrolladas por las administradoras de fondos de pensiones, según se explicó ampliamente.*

*Adicionalmente, la Sala no puede pasar por alto la indebida fundamentación con la que la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal de Medellín emitió su sentencia, pues sin razón alguna se limitó a señalar que a partir del Decreto 019 de 2012 es imputable responsabilidad por omisión o cumplimiento deficitario del deber de información a las AFP, sin especificar la norma de ese decreto que le daba sustento a su dicho y sin la construcción de un argumento jurídico que soportara su tesis. Es decir, la sentencia estuvo desprovista de una adecuada investigación normativa y un discurso jurídico debidamente fundamentado.”*

En cuanto a las consecuencias de las constancias que se registran en los formularios de afiliación o traslado, se dijo:

***“2. El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente. Necesidad de un consentimiento informado***

*Para el Tribunal el consentimiento informado no es predicable del acto jurídico de traslado, pues basta la consignación en el formulario de que la afiliación se hizo de manera libre y voluntaria.*

*La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en*



*los formatos pre impresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre U voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado.*

*Sobre el particular, en la sentencia CSJ SI. 19447-2017 la Sala explicó:*

*Por demás las implicaciones de la asimetría en la información, determinante para advertir sobre la validez o no de la escogencia del régimen pensional, no solo estaba contemplada con la severidad del artículo 13 atrás indicado, sino además el Estatuto Financiero de la época, para controlarla, imponía, en los artículos 97 y siguientes que las administradoras, entre ellas las de pensiones, debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios de buena fe «y de servicio a los intereses sociales» en las que se sancionaba que no se diera información relevante, e incluso se indicaba que «Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».*

*Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario[...].*

*De esta manera, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado.*

*Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado (CSJ Sl. 19447-2017), entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.*

*Como consecuencia de lo expuesto, el Tribunal cometió un segundo error jurídico al sostener que el acto jurídico de traslado es válido con la simple anotación o aseveración de que se hizo de manera libre y voluntaria y, por esa vía, descartar la necesidad de un consentimiento informado.*

Y en materia de carga de la prueba del deber de información, anotó:

*“En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.*

*Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado entre regímenes, es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión.”*

Con sustento en estos presupuestos, esta Colegiatura comparte la decisión proferida por el *a quo* en este aspecto, de ahí que habrá de confirmarse el punto, pues basta la mera ausencia de información al afiliado, clara, precisa y completa, para que se produzca la irregularidad del acto de cambio de régimen pensional, situación que fue exactamente la que ocurrió en el presente caso; a la Sala no le queda la menor duda que la demandada, en este caso, Protección S. A., al no haber arrimado al proceso prueba idónea y

completa de la información que se le debió de haber brindado a Nancy del Socorro Villegas Correa en el traslado que realizó el 15 de agosto de 2001, la consecuencia no puede ser otra diferente a la de declarar ineficaz tal acto y, por tanto, tener como única vinculación válida, y sin solución de continuidad, la que tenía con el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin que para el efecto el registro de “VOLUNTAD DE SELECCIÓN Y AFILIACIÓN” que registra el documento obrante a folios 35, y que textualmente dice: *“HAGO CONSTAR QUE LA SELECCIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD LO HE EFECTUADO EN FORMA LIBRE, ESPONTANEA Y SIN PRESIONES. MANIFIESTO QUE HE ELEGIDO A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. PARA QUE ADMINISTRE MIS APORTES PENSIONALES Y QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA SOLICITUD SON VERDADEROS”*, tenga consecuencia alguna, por las razones que precedentemente quedaron expuestas, y mucho menos la reasesoría que da cuenta el documento obrante a folios 36, porque no tiene efecto sobre el traslado inicial que es el que se declara ineficaz, tal como quedó dicho en la sentencia cuyos apartes se transcribieron.

Esto que se dice conlleva entonces a que las partes deban ser restituidas al estado anterior (art. 1746 del CCC), en otras palabras, que la afiliación de la demandante con Colpensiones, no solo nunca sufrió alteración alguna, sino que Protección S.A. deberá trasladar a Colpensiones la cuenta de ahorro pensional, sus rendimientos y, además, lo descontado por los gastos de administración, seguro previsional y Garantía de la Pensión Mínima, tal como se desprende de lo que dispuso el fallador de primer grado. Eso sí, se dejará expresa constancia que lo dispuesto en materia de bonos pensionales, pues el titular de ellos, en caso de existir, es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se revocará. En relación a estas devoluciones, en especial sobre los gastos de administración, sea del caso tener presente lo que sostiene la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema en la sentencia SL1421-2019, rad. 56174, en la cual se dice lo siguiente:

*“Sobre las consecuencias de la nulidad del traslado entre regímenes esta Sala en sentencia SL, del 8 de sep. 2008, rad. 31989, reiterada en varias oportunidades, adoctrinó:*

*[...]*

*“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.*

*“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.*

Y de manera más precisa, en cuanto a todos los conceptos antes anotados, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia del pasado 29 de julio (SL 2877 2020, Rad. 78667), expresó:

*“En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

*Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que*

*todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.*

Igualmente se adicionará a la decisión que se estudia, el que Protección S.A. dispondrá de un plazo de 30 días, contados a partir de la ejecutoria de esta decisión, para que proceda a realizar la entrega a Colpensiones de los dineros respectivos (art. 16 del Decreto 692 de 1994), en tanto estas sumas son el soporte para el pago de las prestaciones que otorga el régimen de prima media a sus afiliados, y que tiene como objetivo darle plena vigencia al principio de sostenibilidad financiera, de consagración constitucional en el artículo 48 de la Constitución.

Las excepciones propuestas estuvo bien que no se declararan probadas: unas por no envolver hechos extintivos o modificativos de los derechos reconocidos, entre ellas falta de causa para demandar, improcedencia de la declaratoria de invalidez del traslado, buena fe, cobro de lo no debido; y otras, como la de prescripción, incluyendo en ésta la que apunta a la prescripción de las sumas descontadas, por estar comprometido en definitiva un derecho pensional, que como bien se sabe no puede verse afectado por el mero transcurso del tiempo. En la sentencia inicialmente citada, se anotó:

*“Conforme lo explicado, los afiliados al sistema general de pensiones pueden solicitar, en cualquier tiempo, que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales y, por esa vía, que se reconozca a cuál de los dos regímenes pensionales (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados. Lo expuesto no es algo nuevo en la jurisprudencia del trabajo, pues incluso desde la sentencia CSJ SL795-2013 ya la Corte había adocinado que «el asegurado está legitimado para interponer, en cualquier tiempo, reclamos relacionados con **la afiliación**, las cotizaciones, el ingreso base de cotización y todos aquellos componentes de la pensión».*

*Hay que mencionar que así como la declaración de ineficacia es imprescriptible, los derechos que nacen de ello también tienen igual connotación. En efecto, conforme al artículo 48 de la Constitución Política, el derecho a la seguridad social es un derecho subjetivo de orden irrenunciable, premisa que implica al*

*menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular (inalienable e indisponible), como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable). En este sentido, la jurisprudencia del trabajo ha sostenido que el derecho a la pensión o a obtener su valor real, puede ser justiciado en todo tiempo (CSJ SL8544-2016).*

En conclusión de todo lo antes dicho, y salvo lo dispuesto en materia de la devolución de bonos pensionales y el plazo señalado para que Protección S.A. proceda a entregar la cuenta de ahorro pensional y demás ítems, el fallo de primer grado se habrá de confirmar en su integridad, incluido lo relativo a costas.

Atendiendo a la manera como se decide el recurso interpuesto, la Sala estima que en esta instancia las costas deben estar a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho, a favor de la demandante, se fija la suma de un SMLMV (Art. 365-1 del C.G. del P.).


## DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación y consulta, de fecha y procedencia conocidas, salvo lo dispuesto en materia de bonos pensionales, punto que se **REVOCA**; y en cuanto al plazo de que dispone Protección S.A. para entregar los dineros a Colpensiones, punto que se **ADICIONA**, para señalar uno de 30 días contados a partir de la ejecutoria de esta decisión, de conformidad con lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

Costas de la instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. Como agencias en derecho se fija la suma de un SMLMV, a favor de la demandante.

La presente decisión se notifica en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

SALVAMENTO DE VOTO



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por  
ESTADOS N° 88 fijados el 24 de mayo de 2021  
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El Secretario